Imprimir

En elecciones no basta con contar bien los votos. También es indispensable proteger las condiciones en las que los ciudadanos forman su voluntad. Cuando unas pocas empresas pueden decidir qué voces se escuchan, qué mensajes desaparecen y qué pronósticos adquieren apariencia de verdad, el problema alcanza la soberanía de los pueblos. Brasil nos obliga a discutir quién gobierna la conversación pública y cómo impedir que la riqueza privada se convierta en una autoridad electoral sin mandato.
Las denuncias de la campaña de Lula contra Meta describieron obstáculos en la publicidad digital y diferencias en las respuestas de su inteligencia artificial frente a las candidaturas de Lula y Flávio Bolsonaro. Meta negó favorecer a una opción política y atribuyó los episodios a fallas técnicas. El Tribunal Superior Electoral ordenó garantizar la igualdad de trato y, posteriormente, exigió explicaciones técnicas a Meta y X.

La explicación técnica no resuelve por sí sola la responsabilidad política. Los sistemas tienen propietarios, objetivos y reglas de funcionamiento. Una restricción que impide comunicar durante una jornada decisiva puede causar un perjuicio que no se repara restableciendo el servicio después. La democracia necesita respuestas oportunas y capacidad independiente para examinar lo ocurrido. No puede quedar esperando a que una empresa se investigue a sí misma y decida qué parte de sus conclusiones quiere revelar.

A ese escenario se sumó Polymarket, plataforma de mercados de predicción cuyas cotizaciones presentaron a Flávio Bolsonaro como favorito. El 10 de septiembre de 2026, CNN Brasil registró una probabilidad implícita del 52 % para Bolsonaro y del 45 % para Lula. La circulación de estos porcentajes introdujo en el debate electoral una expectativa favorable al candidato de la derecha, revestida de la autoridad que suele concederse a una cifra. Pero el precio de un contrato negociado por apostadores no representa el porcentaje de ciudadanos que votará por alguien.

La diferencia importa. Una encuesta consulta una muestra de electores conforme a un diseño que debe explicarse y evaluarse. Un mercado de predicción agrega operaciones de participantes que arriesgan dinero. Puede aportar información, pero su calidad depende de la

participación, la liquidez, los incentivos y las condiciones de negociación. Tener más dinero para apostar no concede una representación mayor de la ciudadanía. Confundir ambos instrumentos permite que una señal financiera sea recibida como si expresara la voluntad popular. Por eso es legítimo examinar el papel de Polymarket, de la que es asesor Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, en la promoción pública de expectativas favorables a Bolsonaro.

El riesgo consiste en que una predicción deje de ser una información sobre el futuro y se utilice para influir sobre él. Un favoritismo presentado como inevitable puede desalentar a adversarios, animar aportes económicos o fijar la agenda periodística. Si el resultado electoral contradice después la cotización, también puede ser usado para alimentar sospechas contra las urnas. Son mecanismos de influencia posibles.

La soberanía se compromete cuando los pueblos conservan formalmente el derecho a elegir, pero pierden capacidad para gobernar las condiciones informativas de esa elección. Brasil puede organizar sus comicios y fiscalizar a sus candidatos; sin embargo, su autonomía queda debilitada si decisiones empresariales tomadas fuera de su territorio determinan, de manera opaca, quién consigue hablar y qué versión de la realidad alcanza a millones de personas. La dependencia tecnológica permite ejercer poder político sin asumir las obligaciones de una autoridad.

La obscenidad política aparece cuando la acumulación de riqueza pretende conceder a unos pocos el derecho de intervenir sobre la voluntad de sociedades enteras y, al mismo tiempo, sustraerse al control de esas sociedades. El problema es utilizar una posición dominante sobre la comunicación para imponer ventajas, ocultar intereses o dificultar el cumplimiento de garantías electorales. Un país pierde soberanía cuando carece de instrumentos efectivos para impedir que un poder privado condicione arbitrariamente su deliberación.

La democracia también sufre porque la igualdad del voto necesita una oportunidad razonable de conocer, discutir y controvertir. Un ciudadano dispone de su palabra. El dueño de una infraestructura digital dispone, además, de facultades sobre la circulación de millones de

palabras ajenas. Equiparar ambas posiciones bajo una invocación indiferenciada de la libertad de expresión encubre la desigualdad que debe corregirse. Las garantías tienen que proteger igualmente a Lula, a sus adversarios y a quienes rechazan las opciones dominantes. Su legitimidad depende de esa universalidad.

Esa intervención manipulada también amenaza la verdad porque tiene el poder de moldear nuestra percepción de la realidad y, a través de ella, influir en nuestras decisiones. La repetición masiva, la amplificación selectiva y el silenciamiento de otras voces pueden hacer que una afirmación parezca indiscutible o que un resultado electoral se presente como inevitable. La plataforma puede intervenir sobre la realidad y después presentar los efectos de su propia intervención como prueba de que siempre tuvo razón. La democracia exige romper ese círculo, distinguir los hechos verificados de las opiniones y las predicciones, y someter a escrutinio los intereses que organizan lo que vemos.

El problema trasciende Brasil. En enero de 2025, Elon Musk respaldó a Alternativa para Alemania y conversó en X con Alice Weidel. La preferencia era pública; lo excepcional era que quien intervenía en una elección extranjera era también propietario del espacio donde se difundía la conversación. En otro ámbito, Musk reconoció que había rechazado una solicitud ucraniana de activar Starlink en Sebastopol en 2022 para facilitar un ataque contra la flota rusa. Son situaciones diferentes, pero ambas muestran las consecuencias de depender de infraestructuras sujetas a decisiones privadas de enorme alcance público.

Algunas ideas de sus protagonistas ayudan a entender este horizonte. Peter Thiel escribió en 2009: «*Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles*». Su propuesta de escapar de la política permite sugiere que ve limitada su libertad. Si solo son libres quienes tienen el poder de saltarse las reglas, los demás quedan obligados a cumplir unas normas que ni siquiera pueden cambiar.

No todos los empresarios tecnológicos comparten una doctrina ni hay fundamento para suponer que actúan siempre coordinadamente. Pero la concentración de poder constituye un problema incluso sin conspiración. Ninguna capacidad de cálculo autoriza a decidir por todos

qué desigualdades son aceptables, qué trabajos pueden desaparecer o qué vidas merecen protección. Esas decisiones requieren conocimiento y participación de quienes vivirán sus consecuencias. La eficiencia empresarial no reemplaza la legitimidad democrática.

Brasil ofrece también una razón concreta para la esperanza. Lula fue reelegido el 25 de octubre de 2026 con el 51,79 % de los votos válidos, según el TSE. Su campaña acudió a la justicia para reclamar igualdad frente a las plataformas. A ello se sumaron movilizaciones en las calles y las redes, algunas impulsadas autónomamente por la sociedad civil, y una reorganización de la campaña tras el primer turno.

En ese sentido político, la campaña y la movilización social consiguieron contrarrestar las desventajas denunciadas y desmentir la imagen de una derrota inevitable. El triunfo de Lula es también una derrota para Polymarket y para Meta. Lo verificable es más importante que una explicación triunfalista: el electorado decidió de manera distinta a las expectativas que habían favorecido a Bolsonaro. La ciudadanía conservó capacidad de acción y las apuestas no pudieron sustituir las urnas.

Esa victoria no exonera a las plataformas ni vuelve innecesaria la investigación. Los derechos no dependen de que una campaña encuentre fuerzas extraordinarias para compensar obstáculos evitables. Se necesitan auditorías independientes, conservación de evidencia, transparencia publicitaria, acceso protegido a datos para investigar y recursos electorales capaces de producir efectos antes de que sea demasiado tarde. Los mercados de predicción deben identificar claramente qué miden, advertir que no son encuestas y permitir el examen de operaciones concentradas o coordinadas.

La intromisión necesita una sociedad organizada que la domine. Sindicatos, universidades, medios independientes, organizaciones comunitarias y movimientos sociales pueden construir vínculos que no dependan por entero de una cuenta o un algoritmo. La acción colectiva permite compartir conocimientos, disputar reglas y exigir responsabilidades. También devuelve a las personas una experiencia que el aislamiento debilita: comprobar que su voz adquiere fuerza cuando se encuentra con otras.

Naomi Klein propuso, en la Asamblea Popular sobre Inteligencia Artificial de Nueva York, hacernos «más humanos, más amorosos, más vivos, más presentes». Su reflexión relaciona la resistencia al poder tecnológico con condiciones materiales y afectivas que permitan querer permanecer en el mundo: vivienda, cuidado, comunidad y razones para esperar. Esa perspectiva convierte la defensa de nuestra humanidad en una tarea política concreta. En línea con Naomi Klein, está Marina Garcés quien sentenciaba: Una vida agotada y solitaria ofrece menos posibilidades de deliberar y organizarse; una vida acompañada puede recuperar capacidad de decisión.

Por eso defender la democracia es defender la vida misma. De la capacidad de decidir juntos dependen las condiciones del trabajo, el cuidado de los cuerpos, el agua, la paz y la posibilidad de habitar un planeta común. Si esas decisiones quedan subordinadas a una minoría que controla las infraestructuras del conocimiento, también se debilita nuestra capacidad de proteger todo lo demás. Los tecnomillonarios no tienen un título superior al nuestro para decidir el porvenir.

Recuperar nuestra humanidad significa volver a escucharnos, cuidar a quienes son vulnerables y reconocernos como personas capaces de actuar juntas. Significa convertir la indignación en organización y la esperanza en garantías duraderas. Brasil recuerda que ningún propietario posee por completo el futuro. Frente a quienes quieren reducirnos a datos, consumidores o apostadores, la acción colectiva nos permite seguir siendo ciudadanos. Así podremos defender la verdad, la soberanía de nuestros pueblos y la vida compartida que hace posible la democracia.

Carlos José Guarnizo Rico

Foto tomada de: Infobae